

# LAS INSTITUCIONES DE LA IGLESIA. CLASIFICACIÓN Y MARCO LEGAL EN ESPAÑA\*

CARMELO DE DIEGO-LORA

---

## SUMARIO

---

**I •** ACLARACIONES PREVIAS. **II •** LA NECESIDAD DE INSTITUCIONES EN LA IGLESIA. **III •** COMMUNIO E INICIATIVA INSTITUCIONAL. **IV •** IGLESIA-INSTITUCIÓN E INSTITUCIONES DE LA IGLESIA. **V •** MARCO JURÍDICO DE LAS PERSONAS JURÍDICAS ECLESIASTICAS. **VI •** LA PERSONA JURÍDICA, PIEZA CLAVE AL SERVICIO DE LA MISIÓN DE LA IGLESIA. **VII •** EJEMPLOS DE ALGUNAS INSTITUCIONES DIOCESANAS DE ÍNDOLE PATRIMONIAL.

---

### I. ACLARACIONES PREVIAS

El término «institución» tiene en el diccionario de la Academia de la Lengua española una acepción que es la de «instrucción, enseñanza, educación». Pero también hace referencia la palabra *Instituciones* —nombre aquí enunciado— a los organismos que cumplen funciones públicas en la sociedad. Desde este punto de vista jurídico puede entenderse por institución «un grupo social basado en un acto especial de fundación y puesto al servicio de una obra social determinada, que trasciende a los intereses particulares de quienes la sirven, y que funciona como un fin objetivo y permanente del grupo»<sup>1</sup>. Entendemos que es llegado el momento de aventurar una opinión al objeto de nuestro estudio: cuando se habla de instituciones de la Iglesia nos referimos fundamentalmente a esos organismos que cumplen funciones públicas en la Iglesia, pero han de ser —y así lo sue-

\* Conferencia pronunciada en las «Jornadas para el estudio de la fiscalidad y contabilidad de las Instituciones de la Iglesia», celebradas los días 15-17 de abril de 1997, y organizadas por la Vicesecretaría para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española.

1. HERVADA, J.-LOMBARDÍA, P., en Instituto Martín de Azpilcueta, *Comentario exegético al Código de Derecho canónico*, I, 2.ª ed., Pamplona 1997, p. 39.

len ser— órganos que a su vez, ellos, por su estructura y funcionamiento, estén ilustrándonos constantemente, aleccionándonos, acerca de lo que la Iglesia es, de cuáles son las funciones públicas que les competen según su naturaleza y origen, según sus finalidades.

Podemos materializar el término Iglesia y reducirlo, en su aspecto de Iglesia visible, en cuanto sociedad<sup>2</sup> que actúa en el mundo y en él opera jurídicamente, hasta tal punto que nos permita, de modo extremo, considerarla bajo un prisma puramente economista. Así parece que habría de considerarse a la Iglesia y a sus instituciones, en cuanto gozan de un sistema contable, y tienen a un clero y a otros servidores sometidos a normas propias de la Seguridad Social: esto significaría contemplar a la Iglesia y a sus instituciones sólo como sujetos pasivos de impuestos establecidos por la comunidad política. En cambio, conviene a mi juicio aclarar que los juristas no podremos contentarnos nunca con la mera aceptación consolidada de estas concepciones, que si pueden tener un valor coyuntural derivado de las actividades de la Iglesia, que se ha de hacer operativa en el mundo sujeta a las leyes de los poderes políticos y sociales que lo gobiernan, sin embargo, hay que mantener siempre la cabeza clara para no confundir nunca a la Iglesia y a sus instituciones con las empresas terrenas, civiles o mercantiles, que pagan impuestos, que viven una ordenada contabilidad y que cuentan con un personal a su servicio que merece ser asegurado ante los eventos de enfermedad, incapacidades o ancianidad.

Los mismos canonistas, desde el propio punto de vista estricto del Derecho canónico, entiendo que hemos de aceptar nuestra propia impotencia cuando se intenta, incluso por el propio Código de Derecho canónico, ofrecer una conceptualización técnico-jurídica para la Iglesia Católica, que no deja de ser —por lo menos para mí—

2. El c. 204 § 2 puntualiza: «Esta Iglesia, constituida y ordenada como sociedad en este mundo, subsiste en la Iglesia Católica (...)». A este canon comentará FORNÉS, J. —en Instituto Martín de Azpilcueta, *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, II, Pamplona 1997, p. 39— lo siguiente: «La consideración de la Iglesia como “sociedad” implica poner de relieve dos aspectos fundamentales: a) su carácter de *institución* es decir, de realidad jurídica que debe su origen a la voluntad del Divino Fundador y que tiene unos rasgos de permanencia, trascendencia e independencia de las personas que la forman; b) su estructura como un cuerpo social y unitario, que no es la simple suma de sus componentes, sino una entidad propia e independiente de sus miembros».

insatisfactoria. En efecto, el c. 113 § 1 nos dice: «La Iglesia católica y la Sede Apostólica son personas morales por la misma ordenación divina». El texto latino es más expresivo: no es que sean personas morales, sino *rationem habent ex ipsa ordinatione divina*. Estamos sólo acercándonos, sirviéndose el Código de la relación comparativa y analógica. No intenta conceptualizar de modo absoluto contra lo que se dice desde la traducción española.

En contraste, otro documento publicado bajo la autoridad de quien ejerce el Supremo Magisterio de la Iglesia, la Constitución Apostólica *Fidei Depositum*, de Juan Pablo II, de 11 de Octubre de 1992, que presenta el Catecismo de la Iglesia Católica, antes de entrar éste a exponer el Artículo «Creo en la Santa Iglesia Católica», resaltaré que «la misión de Cristo y del Espíritu Santo se realiza en la Iglesia, Cuerpo de Cristo y Templo del Espíritu Santo» (n. 737). Una misión, la de la Iglesia, que «no se añade a la de Cristo y del Espíritu Santo, sino que es su sacramento: con todo su ser y en todos sus miembros ha sido enviada para anunciar y dar testimonio, para actualizar y extender el Misterio de la Comunión de la Santísima Trinidad» (n. 738). Y, a continuación, el Artículo que trata de la fe en la Iglesia, irá escogiendo textos de la Constitución *Lumen Gentium*, y de otras Constituciones y Decretos del propio Concilio Vaticano II (*Christus Dominus*, *Presbyterorum Ordinis*, *Apostolicam Actuositatem*, *Ad Gentes*, *Perfectae Caritatis*, etc.), que inciden, de uno u otro modo, en destacar perfiles, en completar aspectos concretos, en alumbrar nuevas enseñanzas acerca del ser y de la acción de la Iglesia. No podemos aquí ir más allá. La Ecclesiología, como especial ciencia teológica, todos sabemos el vigor que alcanza en estos días<sup>3</sup>.

Los juristas, al final, nos hemos quedado con una fórmula —como de costumbre nos ocurre— un tanto sintética y acaso insuficiente, pero que inspirada en el c. 204 basta quizá para acceder jurí-

3. La propia Constitución Apostólica de SS. Juan Pablo II, *Sacrae disciplinae leges*, de 25 de Enero de 1983, hace notar la dificultad que aquí se indica: «aunque no sea posible —dice el Pontífice— reproducir perfectamente en lenguaje «canónico» la imagen de la Iglesia descrita por la doctrina del Concilio, el Código, sin embargo, habrá de referirse siempre a esa imagen como a su modelo original, y reflejar sus líneas directivas, en cuanto sea posible a su propia naturaleza». Cfr. Instituto Martín de Azpilcueta, *Código de Derecho Canónico*, 5.<sup>a</sup> ed., Pamplona 1992, pp. 39 y 41.

dicamente por este mundo de lo visible de la Iglesia: *pueblo de Dios jerárquicamente estructurado*. Y nos hemos quedado también, a un mismo tiempo, con la convicción de que el Derecho pertenece al ser mismo de la Iglesia y no sólo a su acción. Por ello, entendemos que, de modo análogo que los canonistas no podemos prescindir de lo que la Revelación y el Magisterio nos enseñan acerca de la Iglesia, para poder asentar sobre ello lo que de justicia se requiere en este Pueblo de Dios, esperamos siempre que los eclesiólogos no olviden lo que de Derecho existe en la institución misma de la Iglesia por voluntad de su Divino Fundador, Jesucristo, y en el mismo mandato apostólico de ir y evangelizar a todos los hombres.

## II. LA NECESIDAD DE INSTITUCIONES EN LA IGLESIA

Volvemos al principio: las instituciones de la Iglesia deben dar a conocer, en su propia estructura y en su funcionamiento, que estas funciones institucionales existen y se ejercen al servicio del pueblo de Dios, pues, habiendo sido este pueblo estructurado jerárquicamente, la Jerarquía de la Iglesia<sup>4</sup> tiene y tendrá mucho que decir y que hacer respecto a las instituciones que son objeto actual de nuestra atención.

Esas instituciones de la Iglesia, que se van presentando como necesarias desde los tiempos apostólicos —y de las que se nos comienza a dar noticias en el Libro de los Hechos de los Apóstoles y especialmente en las Cartas de los Apóstoles Pedro y Pablo—, se presentan con ciertas descripciones que implican, desde el principio, rasgos jurídicos indudables.

Orlandis<sup>5</sup> evoca pormenores de la Iglesia Romana recogidos en el *Liber Pontificalis*, por el que se sabe el notable desarrollo que tuvo esta Iglesia, gracias a un prolongado período de paz que disfrutó durante la mitad primera del s. III, bajo la dinastía imperial de los Severos: el clero romano, bajo el Papa Cornelio (251-253), contaba

4. El ya citado c. 204 § 2 concluye: «gobernada por el sucesor de Pedro y por los Obispos en comunión con él».

5. Cfr. ORLANDIS, J., *El Pontificado Romano en la Historia*, Madrid 1996, pp. 31 y 32.

con un clero con más de 150 miembros, de los que 46 eran presbíteros, 7 diáconos y 7 subdiáconos, 42 acólitos y 52 clérigos menores. Pero es más, en el año 251 se celebra un Sínodo romano en el que se condena el cisma de Novaciano y al que asisten 60 Obispos. Se estimaba que las viudas y pobres que se atendían en aquellas fechas, a expensas de la Iglesia, eran unas mil quinientas personas. El número de fieles, ya en aquel tiempo, se calcula que ascendería a varias decenas de miles de personas. Lógico habría de resultar que, en los siglos IV y V, conseguida la *libertas Ecclesiae*, se hiciera posible la incorporación a la Iglesia de muchedumbres, sobre todo urbanas, y que se produjera una importante transformación no sólo en la Iglesia de Roma, sino en tantas otras Iglesias particulares, pues el reconocimiento imperial y el favor que se dispensó de ordinario, por el poder civil, a la Iglesia y al Papado, permitieron la libre comunicación de Roma con las Iglesias particulares y el mejor ejercicio por los papas de la *sollicitudo omnium ecclesiarum*, de esa solicitud pastoral hacia toda la Iglesia<sup>6</sup>.

Con tal desarrollo, se van imponiendo nuevos estilos de gobierno y aumenta la necesidad de arbitrar órganos de comunicación entre las Iglesias locales, y de éstas con la sede romana, y órganos de colaboración y auxilio para el ejercicio de la acción pastoral de las mismas Iglesias, sobre todo en lo que llevaba consigo la difusión del Evangelio en las zonas rurales —más apegadas a sus tradiciones paganas—, la administración de los sacramentos y el ejercicio de la caridad con los necesitados. Pero no nos detenemos más en consideraciones históricas, pues nuestra atención a este tema se termina cuando se advierte que las instituciones de la Iglesia, en su variedad, han nacido y se han desarrollado al ritmo de las necesidades de gobierno y de ejercicio de los *munera Christi* de la Iglesia, sea la Romana, sean las demás Iglesias locales. En este nacimiento y desarrollo tiene una importancia vital la acción de gobierno que protagonizan, respectivamente, el Papa en la Iglesia de Roma, y los Obispos, cabezas de sus propias Iglesias particulares.

6. Cfr. *ibidem*, p. 46.

### III. COMMUNIO E INICIATIVA INSTITUCIONAL

Como se ha puesto de relieve<sup>7</sup>, al promulgar el Papa Juan Pablo II la Constitución Apostólica *Sacrae disciplinae leges*, dada en Roma el 25 de Enero de 1983, por la que se promulga el nuevo Código de Derecho Canónico, se ha destacado en él, acogiendo la doctrina y el espíritu del Concilio Vaticano II, entre otros elementos de la eclesiología conciliar, a la *communio*, como «una idea central y fundamental de los documentos del Concilio». Esta concepción, que habría de influir tanto en las relaciones entre Iglesia Universal y Particular, entre Primado y Colegialidad episcopal, repercute también, de modo estable, en las fuentes que dan origen a las diversas instituciones de la Iglesia: Jerarquía de la Iglesia y Pueblo de Dios.

Nos hallamos, por ello, ante dos polos de iniciativa institucional, con propia consistencia cada uno, pero, a su vez, íntimamente ligados por la *communio*. El problema, como todas las cuestiones que se suscitan en la Iglesia, no es nuevo, pero ahora, desde el Concilio Vaticano II, se hizo más patente la fuerza creativa e impulsora que para el derecho y vida de la Iglesia tiene el mejor entendimiento entre Cabeza y Pueblo, tanto para toda la Iglesia Universal como para cada una de las Iglesias particulares. De la potestad de régimen, también llamada potestad de jurisdicción, y que por institución divina existe en la Iglesia, cuyos sujetos hábiles son los sellados por el orden sagrado, trata y regula el *Codex* en los cánones 129 y siguientes; pero antes, a partir del c. 96, se nos describirá la condición jurídica de las personas físicas y jurídicas en la Iglesia. Como también el Libro II, dedicado al Pueblo de Dios, tiene una parte I destinada a los fieles cristianos, laicos y ministros sagrados, sus derechos y deberes, iniciativas personales y corporativas, para pasar a continuación, en su Parte II, a regular la constitución jerárquica de la Iglesia, tanto a nivel de Iglesia universal como de Iglesia particular, así como de las Agrupaciones de estas Iglesias particulares. Tal sistemática fue desconocida por el Código de 1917, de una clara acentuación clerical en su enfoque ordenador.

7. Cfr. VIANA, A., *Organización del gobierno de la Iglesia*, Pamplona 1995, p. 19.

Sin embargo, tanto en el Código anterior como en el vigente existen dos centros fundamentales de imputación jurídica, o, si se prefiere, de imputación de efectos jurídicos, en cuyas coordenadas se desenvuelve toda la actividad de la Iglesia. Centros en los que, y desde donde, se ejerce la *potestas iurisdictionis*: en el caso de la Iglesia universal, por medio del oficio capital del Obispo de la Iglesia Romana, con esa suprema y vicaria potestad, recibida de Jesucristo, primero por el Apóstol Pedro, y luego por sus sucesores, como Vicario de Cristo y Pastor de toda la Iglesia, y que le hace a su vez Cabeza del Colegio de los Obispos<sup>8</sup>; en el caso de las Iglesias particulares, en las cuales existe y actúa la Iglesia de Cristo, una, santa, católica y apostólica, bajo el también oficio capital por el que se ejerce la potestad, por los respectivos Obispos, con todo ese haz de poderes, facultades, cargas y responsabilidades que el CIC describe<sup>9</sup>.

Tanto el *munus regendi* como el *munus sanctificandi* y el *munus docendi* fluyen del ejercicio de esa *potestad sagrada*, mencionada en *Lumen Gentium*<sup>10</sup> y de la que están investidos, por voluntad del Fundador de la Iglesia, los que la sirven, desde su función propia de Pastor, al total pueblo de Dios o a la porción de este pueblo que les ha sido confiada. Sin embargo, la misión de la Iglesia<sup>11</sup> no se atribuye en exclusiva a la autoridad, ni se identifica simplemente con la misión jerárquica. Si la autoridad en la Iglesia no depende de la voluntad de los fieles, sin embargo, no tiene por qué ser excluida «la correspondencia y participación de los fieles, de acuerdo con su personal condición, en la misión de la Iglesia, e incluso en sus instituciones»<sup>12</sup>.

Ahora, desde el punto de vista organizativo de la Iglesia, lo que aquí interesa destacar es: primero, que la Iglesia Católica, en su universalidad, así como la Santa Sede, por ordenación divina, poseen ellas mismas la razón de ser *persona moral* (ya esto fue antes apuntado); y segundo, que las Iglesias particulares, como enseña el c. 373, gozan cada una de personalidad jurídica *ipso iure*, es decir, por

8. Cfr. cc. 330-341.

9. Fundamentalmente en los cc. 375-402.

10. Cfr. nn. 10, 18, *passim*.

11. Cfr. *Lumen Gentium* (n. 30) y *Apostolicam Actuositatem* (n. 2).

12. VIANA, A., obr. y ed. ctds., p. 23.

virtud del mismo derecho, una vez, claro es, que hayan sido debidamente erigidas.

El Código vigente, que ha optado, con carácter general, por los términos *persona jurídica* para calificar los centros de imputación jurídica, que no son personas físicas, sin embargo, no ha querido utilizar esta terminología para la Iglesia Católica ni para la Santa Sede, quizás para dejar sentado con claridad que la Iglesia en su universalidad no nace, como ocurre con las llamadas personas jurídicas del *Codex*, ni de la prescripción del propio derecho o de la especial concesión de la autoridad competente mediante decreto. Indudablemente, antes que la calificación de persona moral para la Iglesia está su consideración de Cuerpo Místico, o la más reciente calificación de Pueblo de Dios.

#### IV. IGLESIA-INSTITUCIÓN E INSTITUCIONES DE LA IGLESIA

El concepto de *persona*, para el derecho, no sólo es aplicable a realidades que el derecho mismo ha de reconocer y amparar, sino que también el propio derecho positivo suele proporcionarle muchas veces un concepto formal configurador, no coincidente siempre con el concepto que de ésta tiene la filosofía natural o la propia antropología. Basta ver, sin salir del propio Código de Derecho Canónico, que en el c. 96 se dice que por el bautismo el hombre se incorpora a la Iglesia de Cristo y *se constituye en persona*; en cambio, para la tutela judicial de los derechos en la Iglesia, el c. 1476 prescribirá que *cualquiera*, esté o no bautizado, podrá demandar en juicio y responder en él.

Merece, en cambio, que quede bien subrayado que el concepto de *persona* sirve a la técnica del derecho no sólo para designar a los sujetos destinatarios del ordenamiento canónico, es decir, aquellos sujetos del ordenamiento canónico sometidos a sus normas y obligados a observarlas, sino que, ya se las califique de persona moral o jurídica, cuando nos referimos a la Iglesia universal, o a las Iglesias particulares respectivamente, hacemos referencia al espacio jurídico en donde y desde donde se ejerce la potestad sagrada para el gobierno y



servicio a los hombres y a los grupos humanos en el desempeño de las funciones ordenadas a la asistencia y a la realización de la misión salvífica de Jesucristo en este mundo.

La distinción que el CIC hace de las personas morales y las personas jurídicas, como ha hecho notar Lo Castro, va dirigida: si se trata del uso del término *persona moral*, para «indicar ahora fenómenos naturales o de cualquier modo trascendentes al ordenamiento jurídico, que éste debe reconocer (tales son la Iglesia Católica y la Sede Apostólica)»; si se trata del término *persona jurídica*, se dirige a «designar, en cambio, realidades total y solamente formales, dependientes, en cuanto al régimen y en cuanto a su mismo ser, del Derecho positivo. El instrumento de la personalidad jurídica —añade— representa en esa concepción el instrumento formal en manos del legislador para dar vida a nuevos sujetos de derechos»<sup>13</sup>.

Concentrada la totalidad de la potestad sagrada en los respectivos oficios capitales de la Iglesia universal y de las diversas Iglesias particulares, la acumulación de funciones que se produce en esos oficios propios de la cabeza de las Iglesias ha venido requiriendo, por la lógica misma de los hechos, que formalmente se distribuyan por el derecho las funciones públicas establecidas. Para ello el derecho se sirve precisamente de instituciones jurídicas de colaboración *ad intra*, al servicio de la función central directiva y de gobierno pastoral de la Iglesia, arbitrándose organizaciones diversas, con atribuciones jurídicas de capacidad para la actuación adecuada de las funciones públicas. Surge así *una distribución real de funciones entre distintos sujetos y entidades*, de tal manera que, a un mismo tiempo, nos es permitido hablar de la Iglesia-institución y de instituciones de la Iglesia.

Se trata de la creación de instrumentos jurídicos a los que, bajo los titulares originarios de la *sacra potestas*, se les puedan atribuir funciones públicas, hasta el punto de poderse decir que se produce una institucionalización de esas funciones. Estos instrumentos jurídicos son variados. Unas veces serán los llamados *oficios eclesiásticos*, tan adecuadamente definidos por el c. 145; otras veces serán *colegios*

13. LO CASTRO, G., en Instituto Martín de Azpilcueta, *Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico*, I, 2.<sup>a</sup> ed., Pamplona 1997, pp. 774-775.

u oficios pluripersonales; otras veces serán *circunscripciones*, sean territoriales o personales.

No siempre tales instrumentos jurídicos se constituyen como personas jurídicas. El oficio capital se sirve, en múltiples ocasiones, de técnicas jurídicas apropiadas a la función que se ha de ejercer, tales son la técnica propia de la delegación o la de la atribución de facultades vicarias o, en algunas hipótesis, la de otorgamiento de facultades propias para la actuación específica de la función conferida. Surge así en la Iglesia la figura también de los *entes públicos*, es decir, la existencia de «cualquier realidad subjetiva, diversa de las personas físicas, que sea centro de atribución de situaciones jurídicas y actúe para la consecución de fines propios» en el ámbito de la organización eclesiástica<sup>14</sup>. Son, en definitiva, entes públicos o instituciones de las que conviene subrayar que no se pueden confundir nunca con las personas físicas que las sirven y que el derecho establece, de ordinario, conservando su encaje funcional en la persona moral (Iglesia universal, Santa Sede) o en la persona jurídica (Iglesia particular) a la que pertenecen, para garantizar el ejercicio continuado, estable, de actividades que son de interés general para las Iglesias en las que se constituyen. De este modo, este tipo de actividades de interés general no se personalizan ni se permite que pudieran quedar en momento alguno privatizadas. En muchas ocasiones, con tal tipo de instituciones, la Jerarquía de la Iglesia encuentra el modo de encauzar principalmente —aunque no de modo exclusivo— el ejercicio de los *tria munera*. El derecho se preocupará de regular, además, no sólo su creación como sujeto del orden jurídico, sino también los diversos aspectos objetivos del órgano o institución, con determinación de fines, competencias, composición, etc.

Como ejemplo expresivo de lo que acaba de afirmarse, para la Iglesia Universal, me parece interesante citar la Constitución Apostólica *Pastor Bonus*, de 28 de Junio de 1988. Según su art. 1, define a la Curia Romana como «conjunto de Dicasterios e Institutos, que ayudan al Romano Pontífice en el ejercicio de su suprema función pastoral», y designa a continuación los fines que se han de alcanzar

14. ARRIETA, J.I., *Organizzazione ecclesiastica, Lezioni di Parte Generale*, Roma 1991-92, p. 100.

con tal organización. El art. 2 determina qué se entiende por Dicasterios: Secretaría de Estado, Congregaciones, Tribunales, los Consejos y los Oficios, es decir, la Cámara Apostólica, la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, la Prefectura de Asuntos Económicos de la Santa Sede. Entre los Institutos se encuentran la Prefectura de la Casa Pontificia y el Oficio de las celebraciones litúrgicas del Sumo Pontífice. En esta organización tendrán un papel relevante los Padres Cardenales. Y todo ello está concebido «para el bien y servicio de la Iglesia universal y de la Iglesia particular, con la que se fortalece la unidad de fe y de comunión del Pueblo de Dios y se promueve la misión propia de la Iglesia en el mundo»<sup>15</sup>.

Aquí vemos condensadamente toda la organización de la Santa Sede, y por esto lo traigo como ejemplo demostrativo de lo que es, también con carácter general, la organización de la Iglesia universal.

Asimismo en las Iglesias particulares podrá contemplarse esa organización interna en las que los oficios, los colegios, las propias circunscripciones, colaboran en estrecha unión con el Obispo diocesano para que se cumpla en cada Iglesia la misión confiada por su Divino Fundador. En este campo de operatividad pastoral y santificadora, que se ejerce por la Iglesia particular, contemplaremos oficios como los de los Obispos Auxiliares, los Vicarios, Generales y Episcopales, el Moderador de la Curia, los oficios del Canciller de Curia, los Notarios, los Ecónomos, etc. Tampoco podemos olvidar al Vicario o Vicarios judiciales y la organización de tribunales en la Curia diocesana. Igualmente divisamos la actividad y funciones que desempeñan los Colegios u órganos pluripersonales, p.ej., el Consejo episcopal (c. 473 § 4), el Consejo de Asuntos económicos y el de Consultores (vid. cc. 492 y ss. y 502), el Consejo presbiteral, el Cabildo de Canónigos (cc. 503 y ss.), el Consejo de pastoral (p. 511). No siempre son órganos de decisión; a veces serán órganos de consulta para el mejor gobierno pastoral y económico. Pero también encontraremos circunscripciones, y no me refiero a las parroquias, que tienen siempre, una vez erigidas, personalidad jurídica (c. 515 § 3), sino a los arziprestazgos (cc. 553 y s.) y otras zonas pastorales a

15. Con estas palabras se pone término al art. 1.

constituir prudencialmente por el Obispo diocesano para el mayor bien de la actividad pastoral.

De ordinario, nada impide que algunos de esos institutos u organismos puedan ser erigidos formalmente en persona jurídica. Pero, comúnmente, todos esos órganos, y las actividades que ellos atienden —sin confusión subjetiva entre ellos y en las competencias que se les atribuyen— jurídicamente forman un *totum unum* con la diócesis, o con la estructura jurisdiccional que le sea equivalente. En principio, su actividad respectiva será actividad de la Diócesis; el centro de imputación de responsabilidad *ad extra* no dejará de ser sino el Obispo diocesano, en cuanto titular del oficio capital en cada Iglesia particular; y lo mismo en el caso de una estructura jurisdiccional equivalente, si así se ha constituido, sea por razón territorial (c. 368), como las Prelaturas territoriales, las Abadías territoriales, Vicariatos y Prefecturas Apostólicas, sea por razón personal, como las Prelaturas personales<sup>16</sup> o los Ordinariatos militares<sup>17</sup>.

## V. MARCO JURÍDICO DE LAS PERSONAS JURÍDICAS ECLESIASTICAS

La acción de la Iglesia, sin embargo, no sólo se desenvuelve mediante los instrumentos orgánicos de las estructuras jurisdiccionales que son presididas por los titulares originarios de la potestad, recibida directamente de Cristo, el Papa y los Obispos: el Papa, por la misión divina que va «unida a su elección y aceptación; los Obispos a través del sacramento y de la misión canónica»<sup>18</sup>. Esos organismos, que se acaban antes de exponer, son unidades administrativas sin personalidad y carecen de imputación propia. Son centros de competencias, compuestos por una o por varias personas físicas, de ordinario: su actuación «manifiesta frente a terceros la misma entidad en la que están integradas, y tanto la actividad misma del órgano como también los efectos jurídicos de esa actividad, se atribuyen a la entidad pública de la que forman parte»<sup>19</sup>.

16. Cc. 294-297.

17. C.A. *Spirituali Militum Curae*, de 21 de Abril de 1986.

18. VIANA, A., ob.y ed. ctds. p. 68.

19. *Ibidem*, p. 67.

A veces, esos instrumentos orgánicos son, por prescripción del derecho canónico, erigidos en personas jurídicas. Así ocurre, por ejemplo, con ciertas circunscripciones de la organización de las Iglesias particulares como son las Parroquias, que, por el hecho de ser erigidas legítimamente, alcanzan *ope legis* personalidad jurídica (c. 515 § 3). Pero también grupos de parroquias, como son los Arciprestazgos (c. 374 § 2), si el Obispo diocesano desea erigirlas en personas jurídicas puede dar un decreto de erección al respecto. Estos son ejemplos que manifiestan el *doble origen de constitución jurídica* que el c. 114 § 1 muestra para las personas jurídicas: *o por la misma prescripción del derecho o por especial concesión de la autoridad competente dada mediante decreto*. Incluso algunos otros de esos organismos instrumentales de la potestad de la Iglesia, si su Ordinario respectivo desea otorgarle personalidad jurídica, en principio no habrá dificultades para ello si dicta el oportuno decreto de erección.

El concepto de persona jurídica es lógicamente posterior a las estructuras constituidas. Es también básicamente un problema instrumental<sup>20</sup>. Como se ha hecho notar, «la condición de persona jurídica se presenta como un instrumento técnico que hace posible o facilita en gran medida la actuación en la vida pública de los entes colectivos»<sup>21</sup>. Y aunque este autor esté contemplando los actos confesionales concretos en la vida pública de los Estados, el hacer posible, o facilitar la actuación en la vida pública de los entes colectivos, puede aplicarse igualmente a la vida pública de la propia Iglesia. En efecto, ser *persona jurídica canónica* significa tener propia personalidad en el ordenamiento de la Iglesia, con una identidad peculiar y gozando de autonomía en sus decisiones, es decir, significa ser referencia terminal de las relaciones jurídicas protagonizadas por la propia persona jurídica, sea con otros entes públicos, sea con otras personas físicas o jurídicas. Ser lo que se ha llamado «centro de imputación de efectos jurídicos», lo que arrastra determinadas consecuencias, como atraer hacia la persona jurídica misma la eficacia y la responsabilidad —especialmente la económica— procedentes de los

20. *Ibidem*, p. 66.

21. VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, J.M<sup>a</sup>., *Posición jurídica de las Confesiones religiosas y de sus entidades en el ordenamiento jurídico español*, en Instituto Martín de Azpilcueta, «Tratado de Derecho Eclesiástico», Pamplona 1994, p. 575.

actos propios, los cuales se realizarán por medio de sus representantes legítimos. No son únicamente, como se dijo de los órganos de la Curia eclesiástica, centros de atribución jurídica. Decir centros de imputación, como se afirma de la persona jurídica, significa subrayar su autonomía jurídica: en cuanto es, una vez constituida, y en cuanto es capaz de adquirir obligaciones.

El derecho canónico reconoce esa originaria personalidad, como ya vimos, a las Iglesias particulares y por asimilación a las entidades que se le pueden equiparar, pero también la tienen, por prescripción del derecho, las agrupaciones de Iglesias particulares, tal como ocurre explícitamente con las Conferencias Episcopales una vez que han sido erigidas legítimamente (c. 449), con facultades incluso de dictar decretos generales legislativos en los supuestos del c. 455; y también sucede con las Provincias eclesiásticas (c. 432 § 2). Otras instituciones de la organización de la Iglesia poseen asimismo, por prescripción del derecho, la condición de persona jurídica, como ocurre con las Parroquias, tal como antes se indicó, y así sucede con los Seminarios erigidos legítimamente, de ordinario representados por su Rector (c. 238).

Con especial referencia a España, un *Acuerdo* de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, en la XIII Reunión de 11-13 de Julio de 1984<sup>22</sup> estimó que los Cabildos, las Catedrales y los Seminarios, «tienen todos ellos personalidad jurídica canónica y no necesitan de inscripción en el Registro, bien por ser parte de la circunscripción territorial por excelencia, cual es la diócesis, bien por tener personalidad jurídica civil *ope legis*». González del Valle<sup>23</sup> entiende que también corresponde igual tratamiento para los Cabildos, los Santuarios, etc., para los que rige el mismo sistema de reconocimiento que han de seguir las entidades territoriales de que dependen. Asimismo el citado *Acuerdo* determinó que los Arzobispados, Vicarías y Zonas pastorales, «si son canónicamente erigidas como personas jurídicas canónicas, no necesitan del trámite de inscripción para obtener la personalidad jurídica. Basta la *notificación* de la competente autoridad eclesiástica a la Dirección General de Asuntos Religiosos». En cambio, de este tratamiento fueron exclui-

22. Cfr. *Legislación Eclesiástica*, Civitas, 1996, § 18.

23. GONZÁLEZ DEL VALLE, J.M<sup>a</sup>., *Derecho Eclesiástico Español*, Madrid 1991, p. 212.

dos los Secretariados Diocesanos «por ser en sí mismos servicios de las Diócesis y de las Curias», no susceptibles por tanto de personalidad jurídica y sin que puedan ser inscritos «en el Registro de Asociaciones de la Iglesia».

Este *Acuerdo* de la Comisión Permanente proporciona, a mi juicio, una interpretación específica relativa a instituciones concretas que en el fondo plantean cuestiones acerca del derecho reconocido por el art. I, 2 del Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos, de 3 de Enero de 1979, entre el Estado Español y la Santa Sede, a poder organizarse la Iglesia libremente, puesto en relación con el derecho a gozar de personalidad jurídica civil, por la mera *notificación*, reconocido a favor de determinadas circunscripciones que gozan de personalidad jurídica canónica. De este modo, se muestra el contraste con el sistema de inscripción registral para el reconocimiento de personalidad, con todas las consecuencias propias de la capacidad de obrar civil, de las restantes personas jurídicas canónicas, establecido por el art. I, 4 del referido Acuerdo (sobre este tema no deseamos detenernos especialmente por tratarse de cuestión propia de las relaciones Santa Sede y Estado español, y del que únicamente deseamos destacar que se hace operativo generalmente por el método de inscripción en el correspondiente Registro del Estado).

Sólo añadiremos que en este mismo Acuerdo, que es ley interna del ordenamiento jurídico español, en su art. I, 3, explícitamente el Estado reconoce sin más la personalidad jurídica civil de la Conferencia Episcopal Española, como también la misma Iglesia Católica quedó reconocida expresamente por la propia Constitución Española en su art. 16,3. En realidad, sólo podremos medir las verdaderas dimensiones que la libertad de la Iglesia tiene en el ordenamiento español, contemplando la que posean las diversas personas jurídicas, enseñaba Lombardía. Como bien precisaba este autor, refiriéndose a los entes menores de la Iglesia, «es precisamente en este campo de los entes menores donde puede verse de una manera más concreta y tangible hasta qué punto el Estado es respetuoso con la libertad religiosa de sus ciudadanos»<sup>24</sup>.

24. LOMBARDÍA, P., *Escritos de Derecho Canónico y de Derecho Eclesiástico del Estado*, IV, Pamplona 1991, p. 359.

En rigor, siguiendo de momento la línea incidental iniciada, la relación de las personas jurídicas descritas por el Acuerdo sobre Asuntos jurídicos, de 3 de Enero de 1979 —las que no pertenecen a lo que Lombardía designaba como «estructuras jerárquicas de la Iglesia-Institución», y cuyo reconocimiento por el Estado español depende de su inscripción en el correspondiente Registro del Estado—, se presenta con una gran amplitud, a saber, de un lado, las «Órdenes, Congregaciones y otros Institutos de vida consagrada y sus Provincias y sus Casas»; y de otro lado las «Asociaciones y otras Entidades y Fundaciones religiosas». A determinados efectos, el art. V del citado Acuerdo menciona a las «Instituciones (de la Iglesia) de carácter benéfico o asistencial de la Iglesia o dependientes de ella» (n. 1). Pero es más, el art. X del Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, de la fecha antes referida, parte de la existencia legal en España de «Universidades, Colegios Universitarios, Escuelas Universitarias y otros Centros Universitarios» a establecer por la Iglesia Católica, al igual que también reconoce «la existencia legal de las Universidades de la Iglesia establecidas en España en el momento de entrada en vigor de este Acuerdo» (n. 2). Asimismo, se reconoce, en este mismo Acuerdo (art. XI, 1), que la Iglesia Católica, «a tenor de su propio derecho, conserva su autonomía para establecer Universidades, Facultades, Institutos Superiores u otros Centros de Ciencias Eclesiásticas para la formación de sacerdotes, religiosos y seglares». Además, el art. IX del mismo Acuerdo menciona a los «Centros docentes de nivel no universitario, cualquiera que sea su grado o especialidad, establecidos o que se establezcan por la Iglesia». Todo esto se instrumenta por la Iglesia comúnmente a través de la persona jurídica eclesiástica. El propio Vicariato Castrense, en el Acuerdo sobre la Asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y Servicio militar de clérigos y religiosos, también de 3 de Enero de 1979 y ley interna, como los anteriores Acuerdos, del ordenamiento español, es calificado legalmente de «Diócesis personal».

Tal despliegue de referencias a las personas jurídicas de la Iglesia, aparte de aquellas otras que contiene el Acuerdo sobre Asuntos Económicos, de la misma fecha ya referida, nos delata, de una parte, la relevancia jurídica que en el propio ordenamiento jurídico español tiene la persona jurídica eclesiástica; mas de otra la importancia



que, para su propia vida y la del ordenamiento jurídico de la Iglesia, tiene todo este amplio tema de las personas jurídicas. Hasta el punto de que los canonistas suelen a veces llamar la atención sobre esa importancia, en cuanto consideran a la persona jurídica, en general, como una institución de la Iglesia de gran eficacia, pero al mismo tiempo señalan la complejidad con que se presenta su estudio. De la persona jurídica, en el conjunto del ordenamiento canónico, se ha dicho que se presenta como «un mosaico patrimonial». Con esta figura se quiere manifestar que en la persona jurídica canónica están presentes a la vez «las ideas de fraccionamiento y unidad». El fraccionamiento procede de la diversidad de iniciativas tantas veces procedentes de los miembros del Pueblo de Dios, según la variedad de fines de la Iglesia que con ellas se persigue; la unidad viene sugerida porque tal variedad centrifugadora de la acción de la Iglesia se encuentra sometida siempre al poder centrípeto de la jerarquía de la Iglesia, que es la que en definitiva erige con sus decretos a cada una de esas personas jurídicas, o al menos las aprueba en el caso de las personas jurídicas privadas<sup>25</sup>. Estas últimas, aunque no nuevas en el ordenamiento canónico, el Código de 1917 prescindió de ellas, mientras el de 1983 las ha regulado detenidamente.

## VI. LA PERSONA JURÍDICA, PIEZA CLAVE AL SERVICIO DE LA MISIÓN DE LA IGLESIA

«La Iglesia Católica se presenta como un entramado extremadamente complejo de personalidades jurídicas que ocupan unas posiciones en su ordenamiento propio, cuya concreta delimitación ha ido perfilando el derecho canónico a lo largo de los siglos. Esta proliferación de personas jurídicas en el derecho de la Iglesia, se debe,

25. Si en cuanto a los bienes de las personas jurídicas públicas de la Iglesia Católica se afirma que son bienes eclesiásticos, respecto a los de las privadas se ha dicho: «También son bienes de la Iglesia católica, los que pertenecen a las personas jurídicas privadas, que se rigen por sus estatutos propios y no por los cánones, si no se indica expresamente otra cosa (c. 1257 § 2)». A estos bienes no se los designan como bienes eclesiásticos, pero se «empieza a designárseles como bienes eclesiales para significar que también quedan bajo el régimen jurídico canónico» (Vid. LÓPEZ ALARCÓN, M., *Régimen patrimonial de las Confesiones religiosas*, en VV. AA., *Tratado de Derecho Eclesiástico*, Cap. XII, Pamplona 1994, p. 750).

en una buena parte, a que la personalidad moral ha tenido, en el ordenamiento canónico, una función instrumental respecto del dominio sobre los bienes eclesiásticos»<sup>26</sup>. En análogos términos se expresa López Alarcón al sostener que «no es necesario insistir en que el Derecho eclesiástico patrimonial se construye principalmente en torno al Derecho de la Iglesia Católica, que presenta una estructura organizativa y funcional sólidamente establecida y con una experiencia secular que ha constituido un factor patrimonial de la sociedad occidental en la que los Estados han participado y de la que han recibido sus beneficios e influencias»<sup>27</sup>. Independientemente de los matices, en una y otra cita, la idea fundamental es la misma.

Si aquí se acaba de señalar la relevancia de la persona jurídica en la Iglesia con argumentos de índole patrimonial, advertimos también cómo se sostiene por otros autores<sup>28</sup> que la riqueza y proliferación de las asociaciones de fieles son contempladas desde argumentos y razones de índole doctrinal y antropológica, basada esta última en la propia condición social del hombre, es decir, del fiel cristiano, sea clérigo o laico. El Concilio Vaticano II afirma que, «guardando la debida relación con la autoridad eclesiástica, los laicos tienen el derecho de fundar y dirigir asociaciones y, una vez fundadas, inscribirse en ellas». La labor apostólica de los laicos, enseña este Decreto conciliar, se puede desarrollar individualmente o unidos en diversos grupos o asociaciones<sup>29</sup>. Por otra parte valora en gran medida y alienta con diligencia «las asociaciones que, reconocidos sus estatutos por la competente autoridad eclesiástica, por medio de un modo de vida adecuado y aprobado convenientemente y por medio de la ayuda fraternal, fomentan la santidad de los sacerdotes en el ejercicio del ministerio y de esta manera buscan servir a todo el orden de los Presbíteros»<sup>30</sup>. En fin, la tarea universal de la misión de la Iglesia, en medio de la marcha arrolladora de la sociedad actual y el patente desarrollo de todo tipo de instituciones, ofrece «una gran variedad en las asociaciones de apostolado. Unas se proponen el fin apostó-

26. VÁZQUEZ GARCÍA-PENUELA, J.M<sup>a</sup>., ob.y ed. ctds., p. 591.

27. LÓPEZ ALARCÓN, M., ob. y ed. ctds., p. 744.

28. MARTÍNEZ SISTACH, LL., *Las Asociaciones de Fieles*, Barcelona 1994, pp. 14-27.

29. Cfr. Decreto *Apostolicam Actuositatem*, nn. 19 y 16 *respective*.

30. Decreto *Presbyterorum Ordinis*, n. 8.

lico general de la Iglesia; otras, de modo particular, los fines de evangelización y de santificación; otras persiguen la inspiración cristiana del orden temporal; otras dan testimonio de Cristo a través de las obras de misericordia y de caridad principalmente»<sup>31</sup>.

No resulta, pues, extraño que el Código de 1983, que «lleva la inspiración de ese Concilio», en cuyos documentos se muestra la Iglesia como «sacramento de salvación, como el Pueblo de Dios, y su constitución jerárquica fundada en el Colegio de los Obispos juntamente con su Cabeza»<sup>32</sup>, explicita en el c. 215 el derecho de los fieles «a fundar y dirigir libremente asociaciones para fines de caridad o piedad, o para fomentar la vocación cristiana en el mundo, y también a reunirse para procurar en común esos mismos fines»; y a los clérigos seculares, de análogo modo, les reconoce el c. 278 § 1 «el derecho de asociarse con otros para alcanzar fines que estén de acuerdo con el estado clerical».

A veces pudiera pensarse que es radicalmente nuevo, sólo fruto del Concilio Vaticano II, tal poder jurídico de los miembros del Pueblo de Dios, dispuestos a llevar a cabo este tipo de iniciativas, movidos por la solidaridad cristiana y como manifestación de sus responsabilidades en el desarrollo y extensión del Pueblo de Dios, viviendo esa *communio* característica que les hace estar unidos a los Obispos y a Jesucristo en la Iglesia Católica. Tal poder, tal polo de iniciativas institucionales de la propia Iglesia, en cuanto Pueblo de Dios, sin embargo, aunque de un modo específico explicitadas magisterialmente por el último Concilio ecuménico, pertenecen al acervo común y vivo de la Iglesia en cualquier momento de su historia, aunque existan épocas en que tales poderes jurídicos hayan podido quedar amortiguados de algún modo o hayan quedado en un segundo plano en el contexto de la Iglesia-institución.

A continuación se recogen palabras esclarecedoras de Mons. Martínez Sistach en relación a este tema: «Durante los primeros siglos del cristianismo, a pesar de las dificultades y las persecuciones, los cris-

31. Decreto *Apostolicam Actuositatem*, n. 19.

32. Constitución Apostólica, de JUAN PABLO II, *Sacrae Disciplinae Leges*, de 25 de Enero de 1983, de promulgación del CIC. Cfr. la literalidad del texto traducido en la edición ya citada —p. 35— en Nota 3.

tianos se asociaban de acuerdo con las leyes civiles, constituyendo distintos colegios o asociaciones con finalidades caritativas y funerarias. Con la paz de Constantino, el espíritu comunitario de aquellos primeros cristianos experimentó un auge considerable, creando a través de los siglos un sinfín de realidades asociativas de todo género, no solamente entre los laicos, sino también entre los religiosos y los sacerdotes seculares». Y prosigue este autor: «Así, pues, según las exigencias de los tiempos y lugares, fundándose en las distintas actitudes o vocaciones de los individuos, admitió y alentó en el transcurso de su historia no sólo una admirable variedad de institutos religiosos, sino también una armónica diversidad de agrupaciones y asociaciones que, proponiéndose fines determinados, querían entre todos abarcar el vasto campo apostólico»<sup>33</sup>. Campo, indudablemente, que no termina —añadimos por nuestra parte— en los actos de culto, en la predicación de la Palabra de Dios y administración de los Sacramentos, sino que se prolongó tradicionalmente —y se sigue prolongando en nuestro tiempo— en la acción asistencial y caritativa de los miembros de la Iglesia hasta alcanzar satisfacer necesidades de orden temporal, como son la enseñanza, la salud, las que derivan del encuentro de la Iglesia con la indigencia de los hombres. Allá donde se advirtieron —o se advierten— tales carencias llegó y sigue llegando la acción de la Iglesia, ordinariamente por medio de un instrumento apto, la persona jurídica, que hace estable y permite con carácter permanente prestar ayuda a esas necesidades, realizándose eficazmente, en cada caso, la oportuna obra de misericordia. Todas esas actividades son actividades de la Iglesia al realizarse, tantas veces, por personas jurídicas de la Iglesia para servir los fines que su Divino Fundador les propuso cumplir.

Tal variedad de fines se atiende por las personas jurídicas, organizándose éstas *o por la vía de las corporaciones*, o asociaciones, es decir, por conjuntos de personas físicas, *o por la vía de las fundaciones*, es decir, sirviéndose de las cosas, bienes materiales y espirituales, organizados de tal modo que, trascendiendo la buena voluntad y posibilidades de los individuos, cumplan un fin congruente con la misión de la Iglesia<sup>34</sup>. En el lenguaje clásico —cuando aún no estaba

33. MARTÍNEZ SISTACH, LL., Ob. y ed. ctds., pp. 14-15.

34. Cfr. cc. 114 y 115.

perfilada por completo la figura de la persona jurídica— se designaron como *universitates personarum* y *universitates rerum*, acogidas también por el c. 99 del Código de 1917 bajo la terminología de personas morales colegiales y no colegiales. Sin embargo, para este mismo canon, y para aquel Código mismo, toda persona moral había de ser constituida por la autoridad pública de la Iglesia.

El Código de 1983, por el contrario, ha introducido además la distinción, en el c. 116, de *personas jurídicas públicas* y *personas jurídicas privadas*. Aquellas primeras cumplen la misión que se les confía, en nombre de la Iglesia, mirando siempre el bien público. Cuando tienen como fin la transmisión de la doctrina cristiana en nombre de la Iglesia, o la promoción del culto público, u otros fines reservados por su propia naturaleza a la autoridad eclesiástica, la persona jurídica ha de constituirse necesariamente como pública (c. 301 § 1), y por consiguiente han de ser erigidas por la autoridad pública competente de la Iglesia (cfr. c. 312). Las demás asociaciones pueden ser privadas, y no necesitan del decreto de erección, pues adquieren su personalidad jurídica por un decreto formal de la autoridad eclesiástica, una vez que sus Estatutos hayan sido aprobados por la autoridad eclesiástica competente (c. 322). Esta competencia viene dada según la dimensión o alcance al que se extienden las actividades de la persona jurídica: si universal, la Santa Sede; si nacional, la Conferencia Episcopal respectiva; si dentro del territorio de una diócesis, el Obispo diocesano.

El Código de 1983, al regular la persona jurídica le ha dedicado un tratamiento jurídico muy detenido, y no sólo en los cc. 113-123, sino también, de un modo muy particular, con referencia especial a las asociaciones, públicas y privadas de fieles, nada menos que los cc. 298-329<sup>35</sup>. En cambio, para las Fundaciones, aunque *mutatis mutandis* pueden serles aplicables algunas de esas normas dadas para las Asociaciones, su régimen jurídico específico se halla alejado al final del L. V, *De los bienes temporales de la Iglesia*, cc. 1299-1310.

35. Para la distinción personas jurídicas públicas y privadas, vid. LO CASTRO, G., ob. ed. y t. ctds. pp. 790-795.

Para terminar, un elemento común a toda persona jurídica es el de poseer unos Estatutos, regla jurídica peculiar de su constitución y funcionamiento, aprobados por la autoridad competente (c. 117). Por el contrario, la diversidad de régimen jurídico y económico de las personas jurídicas, según sean públicas o privadas, se manifiesta en los cánones citados, si bien estas segundas, aunque los bienes que posean no son calificados de bienes eclesiásticos (c. 1257) y no le atañen por consiguiente las normas canónicas a ellos relativos, sin embargo, no dejan tales bienes privados de estar sometidos a la vigilancia y a cierto control de la autoridad eclesiástica competente (c. 325). No dejan de ser sus actividades, en uno y otro caso, un modo de ser y operar de la Iglesia, si bien las privadas, en contraste con las públicas, no cumplan su misión en nombre de la Iglesia (c. 116 § 1). Sin embargo, la aprobación del Ordinario permite legalmente que la persona jurídica privada resulte asumida en el ámbito propio de la jurisdicción de la Iglesia.

## VII. EJEMPLOS DE ALGUNAS INSTITUCIONES DIOCESANAS DE ÍNDOLE PATRIMONIAL

Esta rúbrica viene exigida por el enunciado de los temas que se han formulado anteriormente. Basta verificar la atención que el Código de 1917 le dedicaba a los *Beneficios* en los cc. 1409-1488, aparte de la referencia a ellos, entre las personas morales no colegiales, de su c. 99. Eran muy variados y sus bienes venían a constituir los fondos patrimoniales cuyas rentas sustentaban a tantos oficios de las Iglesias particulares. Mas no deseo aquí hacer una relación de los más generalizados en las diócesis, que podrían ir desde la llamada mesa episcopal a muchas capellanías erigidas canónicamente, y por consiguiente las *no laicales* (vid. c. 1412, 2º del CIC de 1917; en cambio, las llamadas *laicales* eran fundaciones civiles, aunque sometidas a la vigilancia de la autoridad de la Iglesia<sup>36</sup>.

36. El estudio más completo sobre Capellanías se debe a VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, J.Mª., *Las capellanías colativo-familiares. Régimen Legal vigente*, Pamplona 1991.

En contraste, el nuevo Código sólo cita a los beneficios en el c. 1272. Y para prescribir, respecto a los que aún existan, que se determine su régimen por la Conferencia Episcopal, de conformidad con la Sede Apostólica, de manera que sus rentas pasen a integrarse gradualmente a la institución de la que se trata en el c. 1274 § 1. Aquel citado c. 1272 responde al espíritu de los Decretos del Concilio Vaticano II. En efecto, en el Concilio Vaticano II se enseña la doctrina de que el Obispo debe «poder distribuir mejor y más equitativamente los ministerios sagrados entre sus sacerdotes», por lo que ha de tener «la libertad necesaria para conferir oficios o beneficios, y han de suprimirse, por lo tanto, los derechos o privilegios que de cualquier modo coartan esa libertad»<sup>37</sup>. Pero, en rigor, la indicación del fin de la era histórica del beneficio eclesiástico quedó reservada a otro documento conciliar que no se redujo a señalar que, teniendo en cuenta la naturaleza del propio trabajo de los presbíteros y las condiciones de lugar y trabajo, «la remuneración que cada uno ha de recibir debe ser fundamentalmente la misma para todos los que están en las mismas circunstancias y adaptada a su situación», sino que llega a prescribir: «abandónese el sistema benefical», o al menos sea reformado de manera que el beneficio sea lo secundario y «se considere en derecho» la mayor importancia del oficio mismo<sup>38</sup>.

Ante tales precedentes conciliares no ha de extrañar el c. 1272, y que resulte su lógica consecuencia el c. 1274 § 1 ordenando que en toda diócesis debe haber un *instituto especial para la sustentación del clero*, conforme a lo prescrito en el c. 281. Su finalidad propia y exclusiva es remunerar a los clérigos —incardinados o no— que sirven a la diócesis. El art. 10 de Segundo Decreto General de la Conferencia Episcopal Española, de fecha 1 de diciembre de 1984, entendió que, a juicio del Obispo, tal instituto podía ser configurado, por el Obispo diocesano, «bien como fundación pía autónoma conforme al c. 115 § 3, bien como ente, cuyos bienes estarán a nombre de la diócesis misma, aunque con plena autonomía contable»<sup>39</sup>.

37. Cfr. Decreto *Christus Dominus*, n. 28.

38. Cfr. Decreto *Presbyterorum Ordinis*, n. 20.

39. Cfr. *Boletín de la Conferencia Episcopal Española*, 6 Abril-Julio, 1985, p. 63.

En el propio c. 1274, y prescindiendo de la institución para la seguridad social del clero, que en España está convenientemente regulada, provee en su § 3 a un *Fondo común para atender globalmente las demás necesidades de la Iglesia particular*. El precepto se refiere expresamente a una masa común con la que los Obispos puedan cumplir obligaciones respecto a otras personas que sirvan a la Iglesia y subvenir a distintas necesidades de la diócesis. No se presenta, a nuestro entender, este *Fondo* como una persona jurídica patrimonial sino un fondo, un patrimonio separado, que resulta afectado por distintas responsabilidades de la diócesis. Cabe, sin embargo, federaciones de estas masas comunes entre diócesis, o incluso cooperar entre ellas (a mi parecer sería aconsejable objetivar esos bienes respecto al conjunto del patrimonio diocesano), y en tal caso lo recomendable sería personalizar —o «personificar» como dice algún autor— a esas masas compartidas de bienes económicos constituyendo una fundación autónoma.

Por último, me parece conveniente llamar la atención sobre las *pías voluntades*, es decir, actos de voluntad, *inter vivos* o *mortis causa*, por los que las personas disponen de sus bienes a favor de la Iglesia o los destinan a fines de culto o de caridad (c. 1299). El ejecutor de esas pías voluntades es el Ordinario (c. 1301). Las llamadas *causas pías* pueden reducirse a ser empleadas para afrontar los gastos que las obras piadosas indicadas generen; pueden, por el contrario, afectar a un conjunto patrimonial consolidado, cuyas rentas han de ser destinadas a esos fines de culto o caridad conformes con el fin de la Iglesia. En tales casos podemos encontrarnos con una *fundación pía autónoma*, que se habrá de erigir como persona jurídica autónoma, la cual puede ser pública o privada (c. 325 § 2); pero también con una *fundación pía no autónoma*, cuyos bienes pasen a una persona jurídica, tantas veces la Iglesia particular misma, que ha de cumplir determinadas cargas con las rentas de ese capital recibido.

Concebido en la actualidad, con cierta frecuencia, el gobierno económico de las diócesis siguiendo un criterio anual preestablecido de presupuestos generales, sólo me atrevo, a este respecto, fuera del objeto específico de la lección, a formular una recomendación: donde quiera que se advierta la existencia de unos bienes, capital o rentas, que pertenezcan a una persona jurídica, han de quedar respe-



tados como se ha de respetar la identidad, en todos sus aspectos, de esa persona jurídica, aunque sea pública y sus bienes sean calificados de bienes eclesiásticos (c. 1257 § 1). En las personas jurídicas llamadas corporaciones, por el c. 115 § 2, al ser personas físicas las que integran y desenvuelven sus actividades, ese respeto a la propia identidad es más fácil observarlo. En cambio, puede no suceder igual con las pías fundaciones autónomas cuando ha transcurrido algún tiempo desde su fundación y sus bienes vienen siendo administrados juntamente con los del patrimonio de la diócesis, aunque se atienda celosamente con el cumplimiento de los fines fundacionales.

En fin, conviene dejar muy clara la distinción entre poderes dominicales y poderes jurisdiccionales sobre los bienes eclesiásticos de las personas jurídicas públicas eclesiásticas: su carácter público «afecta a su constitución *ab auctoritate ecclesiastica*, a sus fines —*munus proprium intuitu boni publici ipsis commissum*—, al modo de llevarlos a cabo —*nomine Ecclesiae* (c. 116 § 1)—, a sus relaciones con la Jerarquía». Estos bienes son, sin embargo, efectivamente, suyos, es decir, de la persona jurídica, si bien su «administración y disposición están —como los demás aspectos de la persona jurídica pública— sujetas al régimen administrativo establecido por la autoridad correspondiente»<sup>40</sup>.

Es, a través de esas instituciones de la Iglesia y de esas personas jurídicas eclesiásticas, como la Iglesia —Jerarquía y Pueblo de Dios— desenvuelve gran parte de su misión. Ellas deberán presentarse y actuar ante el mundo de tal manera que transparenten siempre esa función de instruir, educar y dar a conocer con su propio testimonio lo que es la misma Iglesia. Actúa la Iglesia a través de las personas jurídicas, se sirve de ellas, y no solamente de las propias instituciones de su organización jerárquica, para hacer presente entre los hombres y ante el mundo la obra salvadora del Señor Jesús.

40. Muy acentuada tal distinción por MARTÍN DE AGAR, J.T., *Bienes temporales y misión de la Iglesia*, Instituto Martín de Azpilcueta, Cap. XI del «Manual de Derecho Canónico», Pamplona 1991, p. 705.